

Bogotá D.C., 27 de junio de 2023.

Doctor
MAURICIO LIZCANO ARANGO
Ministro
MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Carrera 8ª, entre calles 12 y 13
Edificio Murillo Toro
Ciudad

Asunto: Comentarios a la propuesta de Resolución “*Por la cual se establecen las condiciones para la asignación y modificación de obligaciones de hacer que tengan como propósito ampliar y mejorar la cobertura del servicio de telecomunicaciones, cuando se declaren situaciones de emergencia por parte de las autoridades competentes*”.

Respetado doctor Lizcano,

De conformidad con el plazo concedido por su entidad para la remisión de comentarios al documento referenciado en el asunto, desde Colombia Móvil S.A. ESP, en adelante TIGO, nos permitimos presentar para su consideración nuestros comentarios.

COMENTARIOS GENERALES

Inclusión de las obligaciones de ampliación de cobertura de la subasta del 2019 en el proyecto de Resolución.

Consideramos oportuna la publicación de este proyecto de resolución cuyo fin es ampliar y mejorar la cobertura del servicio de telecomunicaciones cuando sea necesario darle celeridad a la prestación de los servicios de telecomunicaciones debido a estados de emergencia declarados por parte de las autoridades competentes.

No obstante, es necesario ajustar el alcance de este proyecto de resolución, de forma tal que aplique tanto a las obligaciones de hacer como a las obligaciones de cobertura, considerando que actualmente los prestadores de servicios de telecomunicaciones sólo tienen en ejecución obligaciones de cobertura, más específicamente las impuestas en la subasta de 2019, de tal forma que excluir las obligaciones de cobertura haría que este proyecto sea inaplicable en este momento.

No tener en cuenta las obligaciones adquiridas con ocasión de la subasta de 2019, dejaría fuera del alcance de este proyecto a más de 1.200 localidades, impuestas en esta subasta que aún no han podido ser habilitadas por diferentes problemáticas, lo que impactaría la posibilidad de brindar mejor cobertura en otras localidades, en los casos que se presenten situaciones de emergencia.

Resulta importante resaltar que, la Ley 1341 de 2009, en el numeral 10 del artículo 2, modificado por el artículo 3 de La Ley 1978 de 2019, estableció que es deber de la Nación garantizar el derecho constitucional a la comunicación en situaciones de emergencia, así mismo, asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones.

*“10. Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los **derechos constitucionales a la comunicación**, la vida en situaciones de **emergencia...**” (NFT).*

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el artículo 193 de la Ley 2294 de 2023, “*por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*”, el cual señala, que de conformidad con la Ley 1341 se establece como deber de la Nación la responsabilidad de velar por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones con el propósito de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos constitucionales a la comunicación, incluido el servicio público de acceso a Internet declarado como servicio público esencial.

De manera tal que, un juez constitucional se encuentra facultado para solicitar medidas especiales de protección respecto al servicio de telecomunicaciones móviles en algunas zonas del país, lo cual implica que se debe considerar en el proyecto de resolución como causal de cambio o asignación de localidades, las ordenes proferidas por los jueces constitucionales.

Adicionalmente el artículo 8, de la Ley 1341 de 2009 en su parágrafo tercero - “*las telecomunicaciones en casos de emergencia, conmoción o calamidad y prevención para dichos eventos*, indicó el deber de las entidades de orden Nacional de garantizar el despliegue de infraestructura con prelación en situaciones de emergencia económica, social y ecológica.

Asimismo, dado que actualmente no existen mecanismos que incentiven el uso de obligaciones de hacer, tal como se planteó en el proyecto de modificación de la Resolución 2715 de 2020, y considerando que los estados de emergencia son escenarios imprevistos que escapan al control de los operadores y no pueden preverse en la agenda de conectividad, resulta necesario contar con flexibilidad en la asignación de recursos. Además, teniendo en cuenta que los PRST han asignado un presupuesto para atender dichas obligaciones, en caso de necesidad prioritaria debido a los eventos mencionados anteriormente, resulta más apropiado permitir el reajuste de prioridades al cambiar la ubicación de una obligación de baja prioridad hacia una de alta prioridad, como es el caso de una emergencia declarada o en casos en los que un juez constitucional emita una medida de protección especial.

Conforme lo anterior, encontramos procedente incluir las obligaciones de ampliación de cobertura en los eventos excepcionales de la Declaración de estado de emergencia por la autoridad competente y/o en aquellos casos en que un Juez Constitucional ordene medidas de protección.

COMENTARIOS ESPECÍFICOS

Respecto al Artículo 1. Objeto.

Según se mencionó previamente, sugerimos ampliar el alcance de este proyecto de resolución para lo cual planteamos la modificación del artículo de la siguiente forma:

Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer las condiciones para la asignación y modificación, de obligaciones de hacer *y/o cobertura* que tengan como propósito ampliar la cobertura y/o mejorar la calidad del servicio de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT por sus siglas en inglés), cuando se haya declarado una situación de emergencia por parte de la autoridad competente *o en los casos que un Juez Constitucional dicte una medida de protección.*

Respecto al Artículo 3. Asignación o modificación de obligaciones.

Con el fin de no generar incertidumbre en las inversiones de los PRST se hace necesario que, ante la asignación de una obligación, no se proceda de forma unilateral de parte del MinTIC, sino por el contrario, haya un acuerdo en las partes. Estas localidades requieren verificación, conocer la población a beneficiar y su ubicación exacta, para no caer en localidades que en realidad no cuentan con población a la cual suministrarle el servicio o, que la localidad presenta problemas de orden público que imposibilitan la ejecución de obligaciones de hacer.

Así mismo, ante una modificación, se deberían considerar los siguientes escenarios que puedan presentarse en las obligaciones actuales y que actúen como habilitadores a la hora de cambiar una localidad:

- Cuando se presenten circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor o hecho de un tercero, para lo cual se deberá demostrar la situación acaecida.
- Cuando el municipio donde se encuentra la localidad es de un tipo de acceso diferente a lo señalado en el anexo II.
- La localidad asignada no existe en el municipio mencionado.
- Cuando una misma infraestructura brinda cobertura a más de una localidad.
- Imposibilidad de determinar la existencia y/o ubicación real de la localidad.
- Imposibilidad de iniciar o continuar con la implementación del sitio luego de 12 meses suspendidos por casos fortuito o fuerza mayor.
- Cuando se demuestre que para prestar servicio en la localidad asignada debe utilizar transmisión satelital.
- Para los casos anteriores se debe consentir ampliar el plazo.

Finalmente, también es necesario que el MinTIC considere que en caso de presentarse alguna emergencia que motive al PRST, así como al Ministerio para que se hagan cambios en las obligaciones de hacer derivadas de permisos de uso de espectro particulares, estas no estén sujetas a los mismos plazos para su implementación.

Lo anterior, toda vez que, al presentarse situaciones de emergencia, la movilidad, acceso a la zona afectada, y la gestión de recursos humanos y técnicos, se ven impactados y generan condiciones que pueden escapar del control de los PRST. No obstante, cada asignatario debe propender para que la implementación de sus obligaciones de hacer nuevas se lleve a cabo en el menor tiempo posible.

En línea con lo anterior, motivamos al MinTIC para que se involucre a otros actores como la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, y las Gobernaciones y Alcaldías locales. Esto con el fin de que se logre mancomunadamente acelerar

procesos relacionados con la recuperación de vías de acceso, servicios de energía comercial, así como de la simplificación y priorización en la atención de las solicitudes que hagan los PRST relacionadas con permisos y licencias de construcción, cerramiento, uso de suelos, y licencias aeronáuticas.

Respecto al párrafo 1 del artículo 3.

Según se observa en el párrafo 1, desde el entendimiento que propender por mayor disponibilidad del servicio implica tener más de una radio base en una misma área geográfica para contar con respaldo ante una posible emergencia, se hace necesario hacer una precisión al párrafo. En este sentido, se plantea la adición del siguiente texto:

Parágrafo 1.** A fin de propender por la mayor disponibilidad del servicio, se podrán asignar o autorizar obligaciones de hacer en una misma área geográfica **donde ya se cuenta con cobertura de servicios móviles prestados por algún PRST-IMT.

Respecto al párrafo 3 del artículo 3.

En línea con lo mencionado los comentarios generales, este párrafo impacta negativamente las pretensiones que tiene este proyecto de resolución dejándolo sin efecto alguno. Es de señalar que la Resolución 3078 de 2019 fue promulgada en un contexto de normalidad, sin considerar situaciones excepcionales o estados de emergencia, considerando los recursos disponibles y las metas de despliegue de infraestructura previstas en dicho contexto. Dado que la resolución se emitió en un período de normalidad, es razonable suponer que no se tuvieron en cuenta situaciones de emergencia que pudieran surgir en el futuro, o escenarios en los que se requeriría una respuesta rápida y flexible para garantizar el despliegue de infraestructura en condiciones excepcionales.

A su vez, el entorno en el que operan las telecomunicaciones es dinámico y puede estar sujeto a cambios rápidos y significativos. La falta de disposiciones para abordar situaciones excepcionales limita la capacidad de respuesta y adaptación de la regulación a eventos inesperados, impredecibles, y que escapan del control de los PRSTs, como desastres naturales, crisis sanitarias u otras emergencias que puedan surgir y afectar el despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones.

Por lo anterior, partiendo del planteamiento de este párrafo donde señala que “*únicamente podrán ser modificadas según lo establecido en la Resolución 3078 de 2019 proferida por el MinTIC, o aquella norma que la adicione, modifique o sustituya*”, se solicitar eliminar el párrafo 3 de la propuesta de resolución.

Respecto al Artículo 4. Importe de las obligaciones.

Con relación al importe de las obligaciones de hacer que el MinTIC autorice, en virtud de la presente Resolución, es necesario que se tenga en cuenta que, durante estados de emergencia, se pueden presentar incrementos en los costos asociados a Capex, y Opex. En ese sentido, no resultaría viable para un operador, cambiar sus obligaciones de hacer asumiendo el riesgo de que se les reconociera un valor de inversión inferior al de los costos en los que se incurrió. La situación,

tal como la contempla el Ministerio en su Resolución, generaría un desincentivo en la ejecución de obligaciones de este tipo.

Asimismo, se enfatiza en la necesidad de hacer un ajuste integral a la Resolución 2715 de 2020, en todas sus etapas y especialmente a lo relacionado a los procesos de validación verificación y reconocimiento. Como se mencionó en el proyecto de modificación de la mencionada resolución, esto induce en el problema planteado. También, se debe considerar que los costos finales en los que incurre un PRST en el despliegue de obligaciones de hacer son mayores a los establecidos en el Anexo II, generando incertidumbre en las condiciones de inversión en los PRST, por ende, desincentiva el uso de obligaciones de hacer.

Respecto al Artículo 5. Condiciones técnicas.

En relación con las condiciones técnicas, consideramos que no es viable técnicamente que se apliquen las condiciones técnicas establecidas en cada resolución particular de permiso de uso de espectro. Lo anterior, toda vez que las obligaciones de hacer de que trate cada acto administrativo particular tienen un objetivo particular, y que puede ser diferente a las necesidades que surjan en el marco de la atención a una situación de emergencia.

Ejemplo de lo anterior, por un lado, se pueden presentar obligaciones de hacer relacionadas con ampliación de cobertura. Este tipo de obligaciones generalmente implican que se debe garantizar el cumplimiento de niveles de potencia mínimos en áreas extensas, así como el cumplimiento de indicadores de calidad y disponibilidad. Por otro lado, las obligaciones de hacer relacionadas con la atención de eventos de emergencia requieren medidas rápidas para garantizar el servicio de comunicaciones móviles en zonas menos extensas, con presencia de barreras para el despliegue: infraestructura vial limitada o inexistente, y sin acceso a servicios de energía comercial.

En este sentido, durante la planificación es posible tomar acciones que mitiguen los impactos y aseguren la mejor calidad del servicio posible. Sin embargo, cuando se trata de una implementación urgente, no se debe exigir el cumplimiento de indicadores técnicos que no pueden ser alcanzados debido a las condiciones particulares de la zona que se pretende cubrir.

Por ello, es necesario considerar las limitaciones técnicas realistas al establecer las obligaciones de hacer y/o cobertura, evitando imponer condiciones que sean impracticables desde un punto de vista técnico. Asimismo, en situaciones de emergencia, se debe tener en cuenta la necesidad de acciones rápidas sin exigir indicadores que no puedan ser cumplidos debido a las condiciones y particularidades de las zonas a cubrir.

Respecto al Artículo 6. Requisitos para la asignación o modificación de obligaciones.

En el numeral 2, conforme lo expresado con la adición de las obligaciones de cobertura, se plantea se haga la inclusión de la categorización dada en la subasta de 700 MHz indicando el código, el nombre de la localidad, municipio, departamento y año con el que aparece en la resolución de asignación.

En el numeral 3, debe considerarse que ante una emergencia debe primar la prestación del servicio de comunicaciones móviles. Por ello, debe contemplarse la prestación de un servicio temporal con instalaciones provisionales que no necesariamente cumplan con el rigor de las especificaciones

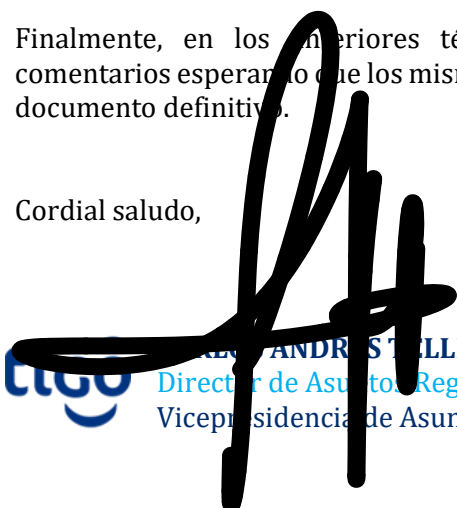
técnicas, mientras se termina de realizar los ajustes definitivos de la implementación. Esto podría considerarse para el cumplimiento de la obligación en 2 fases, la fase inicial o fase temporal y la fase final o definitiva, las cuales deberían contar con condiciones diferenciales dentro del cronograma y sus hitos de cumplimiento.

Respecto a los tiempos de respuesta de las partes involucradas, sugerimos modificar "días calendario" por "días hábiles". Esto se debe a que la revisión para la implementación de una obligación de hacer y/o cobertura afecta a múltiples áreas y, en escenarios como fines de semana con días festivos adicionales, solo se contarían con 2 días para llevar a cabo la revisión completa del proyecto, lo cual resultaría inviable.

El cambio propuesto brindaría un plazo más realista y adecuado para llevar a cabo la revisión requerida en estos casos. De esta manera, se garantizaría un tiempo suficiente para que todas las áreas involucradas puedan realizar una revisión exhaustiva del proyecto y tomar decisiones informadas.

Finalmente, en los anteriores términos ponemos en conocimiento del MinTIC nuestros comentarios esperando que los mismos sean analizados y tenidos en cuenta para la expedición del documento definitivo.

Cordial saludo,



Alexander Téllez Ramírez
Director de Asuntos Regulatorios e Interconexión
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos